

INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS

BOLETIN DE COYUNTURA POLITICA Y ECONOMICA **IEP**

Argumentos

Presentación

Esta es una publicación del
Instituto de Estudios
Peruanos
Año / 2
Número 13
Precio S/. 5.00
Horacio Urteaga 694
Lima 11, Perú
Telf. 32-3070 / 24-4856
Fax [51-14] 32-4981
Correo electrónico
IEPEDIT@IEP.PE
Impreso por Tarea
Asociación Gráfica
Educativa
Lima, noviembre de 1993

SUSCRIPCION
Nacional S/. 65
Extranjero US\$ 70
(Doce números)
ISSN 1021-2760

13

COMITÉ EDITORIAL

Carlos Iván Degregori
Romeo Grompone
(coordinador)
Teobaldo Pinzás

COLABORADORES

Roxana Barrantes
Cecilia Blondet
Julio Cotler
Marcos Cueto
Ponciano del Pino
Luis Miguel Glave
Jürgen Golte
Efraín Gonzales de Olarte
Paula Hernández
Carlos Mejía
Lucía Romero
Fernando Rospigliosi
Carolina Trivelli
Jaime Urrutia
Rafael Varón
Francisco Verdera
Carmen Yon
Patricia Zárate

El sociólogo alemán Schedler señala que las elecciones políticas constituyen un procedimiento para traducir un consenso pasivo e invisible en otro activo y visible. Fujimori, que planteó el referéndum de una nueva constitución como un plebiscito, se encuentra enfrentado al desconcertante cuadro en el que esta afirmación razonable parece perder sentido. En efecto, los sondeos de opinión —en la mayoría de los casos limitados a Lima— mostraban un respaldo consistente a su gestión, pero en la hora de las decisiones, los resultados arrojaron un virtual empate.

En octubre la mayoría de los programas políticos de televisión entrevistaban semana a semana al titular del Ejecutivo. En noviembre los personajes del mes fueron Alejandro Gonzales y Fernando de Romaña. Puede invocarse razones de rating, salvo que ellas valían tanto antes del referéndum como en los días posteriores.

Probablemente Fujimori considere que la reelección no está perdida, esta vez pensando tanto en sus propios méritos como en la falta de otra alternativas. A la oposición le co-

rresponde iniciar una discusión responsable y cuidadosa buscando consensos en temas de descentralización, políticas sociales, fiscalización de las tareas del Ejecutivo y encarar el reto decisivo de pensar orientaciones económicas realistas que no extiendan la pobreza y el desempleo. Este número -de Argumentos analiza los resultados del referéndum desde perspectivas no siempre coincidentes. Quisimos abordarlos atendiendo a matices y divergencias.

Contenido

COYUNTURA POLITICA

El referéndum y la disputa por el Estado
Julio Cotler

2

COYUNTURA ECONOMICA

Nuevas noticias y nuevos problemas
Teobaldo Pinzás

5

POLITICA

El NO de las regiones
María Isabel Remy

7

OPINION

Los resultados electorales bajo la mirada de las encuestadoras. Entrevistas con Manuel Torrado y Alfredo Torres
Carlos Mejía

11

ECONOMIA

La "nueva historia económica" de North y Fogel
Manuel Glave Testino

15

EL REFERÉNDUM Y LA DISPUTA POR EL ESTADO

Julio Cotler

El 31 de octubre, en el referéndum convocado por el gobierno se aprobó por 52% contra 48% el proyecto constitucional. En seis departamentos la propuesta oficial triunfó y en once perdió, en ambos casos por un margen mayor al 2%. Mientras que en ocho departamentos los resultados dieron un cuasi empate, dado que la diferencia entre el SI y el NO era igual o menor a este margen.

Los votos favorables al SI se distribuyeron mayoritariamente en la zona central del país, particularmente en Lima —que tiene cerca del 40% del electorado— y en Junín. Mientras que los votos por el NO se concentraron en el sur andino y en el norte del país. En el primer caso, los márgenes a favor del NO van desde el 17% en Apurímac hasta el 50% en Puno, en tanto que en el norte— "el sólido norte aprista"— la ventaja del NO oscila alrededor del 5%. Estos resultados han dado pie a que algunos comentaristas planteen la existencia de una división del electorado, que polarizaría Lima y su *hinterland* con el resto del país, lo que expresaría el conflicto latente entre el centro y la periferia andina.

Se estima que el ausentismo, los votos blancos y nulos suman 30% del total. El sur andino — Ayacucho, Apurímac, Huancaavelica y Cusco— presenta los más altos índices de ausentis-

mo, que bordean la mitad del electorado. Tampoco quedan atrás Huánuco, Cajamarca, Madre de Dios y San Martín.

Es decir, de un total de doce millones de electores la Constitución ha sido aprobada por un poco más de tres, los que, en su mayoría, parecen provenir de zonas urbanas. Estos datos y el estrecho margen de diferencia entre el SI y el NO han motivado que la oposición reclame al gobierno un acuerdo para modificar los aspectos más controvertidos del nuevo texto constitucional y para establecer una relación que asegure la estabilidad política, conducente a la plena recuperación democrática del país.

Este reclamo se encuentra respaldado por la opinión pública: el 79% de los encuestados por IMASEN considera necesario modificar algunos aspectos de la Constitución. De los que expresan esta opinión, el 67% votó por el SI y 95% por el NO. De igual forma, 74% se inclinan por un entendimiento político entre los partidarios del SI y del NO. Del total, 70% votó por el SI y 82% por el NO (Revista *Sí* 350, 15/11/93). Pero, como era de esperarse, el gobierno ha rechazado de plano estas demandas.

Los resultados del referéndum han sido interpretados como una derrota política del gobierno, puesto que Fujimori planteó la contienda electoral en términos plebiscitarios. El presidente creyó que el consistente apoyo que registran las encuestas hacia su gestión se trasladaría automáticamente a los votos. Por la misma razón,

sus voceros se ufanaban de un triunfo seguro, con una diferencia de 40%. Sin embargo, no obtuvieron esa proporción ni en su plaza fuerte, Lima.

De ahí que, conocidos los resultados extraoficiales, el gobierno dejara de referirse al punto y los medios televisivos buscaran desviar la atención del público concentrándose en la crónica roja.

El caudal de votos contrarios a la Constitución y, en esa medida, de censura al presidente, es particularmente significativo en vista del capital político de Fujimori y los múltiples recursos que desplegó con la seguridad de obtener una victoria contundente contra los divididos y debilitados adversarios.

La desarticulación de los movimientos subversivos, la disminución de la inflación, el respaldo de los organismos internacionales de crédito y la expectativa creada por el oficialismo sobre el inminente ingreso masivo de capitales extranjeros han constituido parte importante del capital del gobierno.

Este fue complementado con la distribución de recursos públicos en los barrios populares, el monopolio publicitario en los medios televisivos, las intervenciones militares, los ataques contra los que se manifestaban por el NO y, por último, el chantaje de Fujimori al anunciar su intención de renunciar en caso de que los resultados le fueran adversos.

La derrota política del gobierno es una singular advertencia de un cambio de ánimo en la población y, eventualmente, del escenario político. Am-

Cuadro 1
Diferencias en el voto, blancos-nulos y ausentismo (%)

SI	Dif.	B-N	A	NO	Dif.	B-N	A
Huánuco	4	16	47	Amazonas	15	?	?
Ica	5	6	23	Apurímac	17	23	43
Junín	15	9	36	Cusco	21	—	47
Lima	19	5	24	Huancavelica	20	25	53
Ucayali	27	9	37	La Libertad	5	10	29
Callao	7	5	15	Lambayeque	4	8	?
				Loreto	16	—	30
				Moquegua	16	6	25
				Puno	50	1	28
				Tacna	8	6	21
				Tumbes	9	7	24
Cuasi empate	Dif.	S-N	A		Dif.	S-N	A
Ancash	1	15	32	Cajamarca	1	19	41
Arequipa	0.21	6	23	Madre de Dios	0.76	8	44.
Ayacucho	0.81	11	55	Piura	1	10	25
Pasco	0.93	15	36				
San Martín	2	16	41				

Fuente: Resultados oficiales del JNE. Las cifras de votos blancos y nulos (B-N) v de ausentismo (A) han sido tomadas de Caretas 1286.11/11/93.

bos amenazan desbaratar el propósito de Fujimori de lograr la reelección en 1995 y seguir gobernando tecnocráticamente con los militares y los empresarios.

Este resultado descalifica ciertas versiones que circulan respecto a la cultura política de los peruanos. Ellas explican el apoyo a Fujimori sobre la base de una presunta cultura autoritaria, de la que los opositores al gobierno estarían inmunizados.

Esta interpretación se emparenta con otra que enfatiza la existencia de un fatalismo autoritario debido a la tradición ibérica y se afilia con la redomada tontería —para decirlo suavemente— sustentada por Alvaro Vargas Llosa, respecto a que el Perú es una "barbarie contenta" (César Hildebrandt: "Insurrección Barbarie", *Oiga* 665, 15/11/93).

Los resultados descalifican igualmente a los oficialistas que han caracterizado a los que votaron por el SI como "modernos" —y pragmáticos— y a los que lo hicieron por el NO como "tradicionales". Ello sería así, en razón de que los primeros favorecerían la liberalización y la "eficiencia" económica, mientras que los segundos estarían dispuestos a mantener el viejo régimen y las prebendas políticas.

Es decir, para estos oficialistas lo que califica la modernidad o la tradición es la actitud con respecto al mercado, sin tomar en cuenta consideraciones sobre la vigencia de la democracia y los derechos ciudadanos de naturaleza económica y social. Esta posición es muy tra-

dicional y el filósofo italiano Benedetto Croce la denominó *liberismo*, en contraposición al liberalismo.

Además, la pobreza de este argumento salta a la vista cuando se sabe que muchos de los que han votado por el SI favorecen la intervención del Estado en la economía y muchos de los que se inclinaron por el NO

están de acuerdo con el desarrollo del mercado, pero en un marco democrático, como condición necesaria para una mejor distribución de los recursos colectivos.

Es así como ambas interpretaciones invierten sus calificativos: mientras para los que sustentan las tesis culturalistas el apoyo a Fujimori es propio del autoritarismo tradicional, para los oficialistas es una muestra de la "modernidad".

A diferencia de estos artificios, la mayoría de las explicaciones sobre los resultados electorales —incluso las del presidente y su entorno— aluden a las nuevas condiciones políticas que ha generado el gobierno y a las actuaciones de la diversa gama de intereses que constituyen la "oposición".

Las explicaciones coyunturales se refieren a los efectos de la propaganda televisiva y a los gestos populistas de Fujimori, al uso que se le quiso dar al epistolario Guzmán-Fujimori, a las noticias sobre los "desaparecidos" de La Cantuta y a los intentos del gobierno para ocultarlas y desfigurarlas, y así sucesivamente.

Pero, más allá de estas interpretaciones inmediatistas, el debate se centra en un problema estructural del país que hoy ha cobrado una importancia cardinal: la presencia y el rol del Estado.

El voto afirmativo responde a la convocatoria plebiscitaria de Fujimori. Es decir, al mantenimiento del orden público y la estabilidad política fundada en la concentración del poder presidencial así como en la esperanza de que sus medidas ultraliberales favorezcan el ingreso del capital extranjero y la dinamización económica. La apuesta por el reinado del mercado —aceptada a veces a regañadientes, como en el caso de los empresarios— subordina los problemas de la democracia, los derechos humanos y el calamitoso estado de las empresas y los trabajadores a aquellos objetivos.

El voto negativo es complejo. Como muchos comentaristas han expresado, el NO expresa múltiples y muy diferentes estados de ánimo y demandas parti-

Cuadro 2
¿Cuál o cuáles de los siguientes puntos cree Ud. que deberían ser modificados?

	Total	Sexo		Voto referéndum			
		Masc.	Fem.	SI	NO	Blanco-Viciado	No votó
Estabilidad laboral	47.1	45.4	48.7	34.2	66.0	55.0	44.0
Gratuidad de la enseñanza	42.7	41.4	43.9	33.9	55.7	52.5	32.0
Pena de muerte	23.6	22.4	24.7	17.0	32.5	37.5	12.0
Reelección presidencial	14.0	17.3	10.9	8.8	23.6	15.0	—
Regionalización	14.0	16.9	11.2	13.0	14.2	17.5	20.0
Otros	4.0	3.9	3.7	3.9	3.8	2.5	8.0
No responde	4.4	3.4	5.4	4.5	4.7	—	8.0
No participan	21.1	21.4	20.8	32.7	5.2	12.5	16.0
Total	Múltiple						

Fuente: IMASEN, publicado en Si 350, 15/11/93.

culares, por lo que nadie puede apropiarse de su representación; por ello, la imagen de una polarización política es insostenible. Sin embargo, los votos por el NO se caracterizan por el hecho de que persiguen asegurar y expandir los derechos ciudadanos y, en esa medida, consolidar el Estado de Derecho, sin que ello se haga a costa del orden, la estabilidad y el crecimiento económico.

En un número anterior de *Argumentos* afirmábamos que la novedad de la campaña electoral era la emergencia de diversas articulaciones de intereses sociales, despegadas de las tradicionales identidades políticas; por esto, la actual geografía electoral no responde a los antiguos enclaves políticos. La redefinición de la sociedad, a raíz de la crisis de los partidos, sugiere la emergencia de una sociedad civil, cuyos intereses debieran integrar las organizaciones políticas para eslabonar la sociedad con el Estado.

En efecto, el proyecto constitucional y, en general, la actuación gubernamental han dado paso a la emergencia de grupos de interés concretos que persiguen, por ejemplo, suprimir la pena de muerte y el Hábeas Data, eliminar las disposiciones que legitiman la hiperconcentración del poder y la reelección presidencial, así como la de-

pendencia del Poder Judicial al Ejecutivo.

Pero al lado de estos reclamos políticos, también abundan las exigencias para que el Estado asuma la responsabilidad de la gratuidad de la enseñanza, la generación de empleos y la estabilidad laboral; asimismo, para que otorgue autonomía a nivel municipal y regional así como recursos para que se cumplan sus objetivos. En términos más generales, para que modifique la orientación económica con miras a crecer y distribuir equitativamente los recursos sociales.

Paradójicamente, en la medida en que el gobierno ha tenido éxito en dismantelar a la subversión y abatir la inflación, el conflicto entre estos problemas y la democracia se ha ido desvaneciendo, lo que facilita que emerjan a un primer plano los problemas económicos, sociales y, con ellos, los relativos a la participación y representación ciudadanas. De ahí que en la exploración realizada por IMASEN, los aspectos de la Constitución que los encuestados consideran que es necesario modificar sean los referidos a estos temas.

El segundo rasgo común a los votos por el NO es su distribución geográfica. A cuenta de posteriores análisis de los resultados electorales, la impresión que se recoge es que la preferencia por el NO se concentra, como se dijo, en la "periferia".

Ello tendría que ver con el hecho de que en esta área la presencia histórica del Estado sea muy reducida y la demanda para que intervenga sea particularmente fuerte, con el fin de suplir la ausencia de un mercado dinámico, a diferencia de lo que ocurre en Lima y su *hinterland*.

Este reclamo provinciano — y, en esa medida, anticentralista— viene de muy atrás, pero hoy parece adquirir rasgos críticos y, en un país heterogéneo y fragmentado como el Perú, no atenderlo podría tener consecuencias trágicas. Por ejemplo, para resolverlo, Daniel Estrada, Alcalde del Cusco, planteó al día siguiente del referéndum la necesidad de federalizar el país.

En estas condiciones, cuando la disputa por el rol del Estado parece, nuevamente, ser la cuestión central, el gobierno de Fujimori se enfrenta a nuevos e impostergables dilemas que no podrá seguir eludiendo. Más, si las nuevas demandas de la sociedad se concretan en sujetos políticos capaces de articularlas. La proximidad de las elecciones de 1995, y sus intenciones de lograr la reelección, obligarán al presidente a tomar decisiones cruciales.

Esperemos que, haciendo de la necesidad virtud, los actores políticos hayan aprendido que la democracia no es un hecho natural, sino un acto deliberado para emprender una convivencia conflictiva, pero dentro de un marco de reglas y procedimientos consentidos y aceptados colectivamente. En esa espera, estamos condenados a ser optimistas. □

BUENAS NOTICIAS Y NUEVOS PROBLEMAS

En el frente económico, en setiembre, octubre y lo que va de noviembre, las autoridades se han visto reconfortadas por varias buenas noticias. Los indicadores de crecimiento económico (ver *Argumentos* 12), la disminución de la inflación y la reanudación de las privatizaciones son indicios alentadores para quienes llevan a cabo el duro proceso de ajuste en la economía peruana y seguramente revisan con creciente impaciencia los diversos indicadores económicos que periódicamente se dan a conocer.

**Teobaldo
Pinzás**

Pero estas agradables novedades no han venido solas. Quizás para sorpresa del gobierno, antes que manifestar complacencia por la evolución de la coyuntura, el sector empresarial ha levantado el tema de la carga tributaria, los impuestos "antitécnicos" y la transferencia a los empleadores de la contribución del 6% sobre las remuneraciones en favor del Fondo Nacional de Vivienda. Al interior del gobierno, hay una viva polémica sobre la exoneración del IGV a los productores agrarios. Todo ello requiere nuevas propuestas y alternativas que hasta ahora el gobierno parece no poder o no querer adoptar.

La inflación continúa bajando

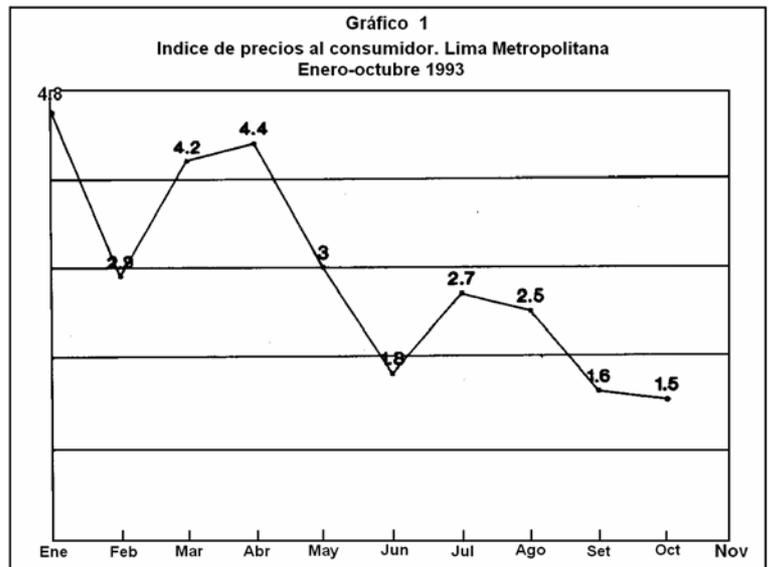
La reducción en el ritmo de incremento de los precios (que en 1990 fue, en promedio, de

43.4% mensual) ha sido un objetivo central del gobierno desde el inicio de la administración Fujimori. En consonancia con este propósito, se ha mantenido una política fiscal y monetaria muy estricta, mientras que mediante la apertura comercial se esperaba poner un límite al aumento en los precios de los bienes transables.

La inflación se redujo progresivamente: durante 1991 fue, en promedio, de 14.5% al mes y en 1992, de 4.7%. Pero parecía que el aumento de precios se había estabilizado alrededor del 4% al mes —lo cual seguía siendo excesivo, sobre todo tomando en cuenta la dureza de las políticas aplicadas—.

Por eso las autoridades deben haber recibido con mucho alivio las cifras de setiembre y octubre del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana (indicador usado ampliamente como representativo de la inflación, ver gráfico 1). Por primera vez en muchos años el incremento de precios fue inferior al 2% durante dos meses consecutivos y se espera que en noviembre tampoco exceda este nivel. A tono con estos alentadores resultados, hay quienes han proclamado que se ha terminado la inercia inflacionaria en el país.

Sin asumir esta posición triunfalista, no hay dudas de



que la disminución registrada en el ritmo del incremento de precios es una buena noticia para todos. Al mismo tiempo, parecería prematuro expedir partida de defunción a la inflación. Aunque la tendencia decreciente es bastante clara, en ella influyen varios factores que probablemente no puedan mantenerse indefinidamente. Debe mencionarse en primer lugar el retraso en los precios y tarifas de bienes y servicios producidos por empresas públicas.

Como se observa en el cuadro 1, los actuales niveles de estos precios y tarifas están muy por debajo de los precios "reales" que se establecieron con el gran ajuste de 1990. Vista desde el lado financiero, esta situación afecta negativamente a las empresas públicas, con lo cual se dificulta su privatización. En el caso de que pasen al sector privado, el reajuste de precios será

Cuadro 1
Indice de los principales precios y tarifas públicas

	1990	1993	
	agosto	agosto	octubre
COMBUSTIBLES	100	56	58
Gasolina 84 octanos	100	58	60
Kerosene	100	52	55
Diesel 21	100	60	63
Residual 6	100	50	47
Gas licuado	100	88	92
TARIFAS ELECTRICAS	100		
Residencial	100	57	57
-Tarifa social s/.mes	100	95	96
-A medidor s/.kwh	100	75	76
Industrial s/.kwh	100	58	57
TARIFAS AGUA	100	83	88
POTABLE			
Social	100	61	64
Doméstica	100	66	72
Industrial	100	106	115
TARIFAS TELEFONICAS	100	56	57
Tarifa básica	100	42	92
Llamada adicional	100	50	48

Fuente: Nota semanal del BCR

inmediato. De todos los combustibles incluidos en el cuadro 1, sólo el gas licuado, cuya producción se privatizó con la venta de Solgás –la empresa líder del sector– registra precios muy cercanos a los establecidos en agosto de 1990.

En segundo lugar, y como es evidente, el bajo nivel de actividad económica es un importante factor en el control de la inflación, en la medida en que reduce o elimina presiones por el lado de la demanda. En este sentido, después de más de tres años, las políticas que combaten la inflación mediante la recesión global estarían logrando su objetivo. El riesgo es que se trate de una victoria pírrica, en tanto que la reducción de la inflación a niveles internacionalmente aceptables –todavía muy por debajo del 2% mensual que parece estarse registrando– entre en conflicto con la recuperación que se produzca, bien como efecto del reinicio endógeno del crecimiento, o

bien por la reactivación que, vistos los resultados del referéndum y la proximidad de las elecciones presidenciales de 1995, el presidente Fujimori se vea obligado a propiciar.

La privatización recupera impulso

Después de sucesivos intentos frustrados de privatización, como el de varias plantas de Papelera Paramonga y Petrolera Transoceánica, en octubre y lo que va de noviembre el proceso recuperó impulso. Así, se vendieron Petrolera Transoceánica, el Banco Popular S.A. de Bolivia y el yacimiento minero Cerro Verde. Otros intentos, centrados en la venta de equipos de PescaPerú, tuvieron resultados poco satisfactorios, pero en conjunto el saldo es positivo.

Sin embargo, la venta de Petrolera Transoceánica fue prominentemente criticada por el ultraliberal diario *Expreso*, porque la operación estipula el monopolio del transporte acuático de la carga de Petroperú por tres años, reemplazándose así "un monopolio público por uno privado". Las privatizaciones del Banco Popular S.A. de Bolivia y Cerro Verde sugieren que la transferencia de empresas en el sector servicios y en aquellos en los que el país tiene grandes ventajas comparativas –en este caso, minería pero también pesca– debe realizarse con relativa facilidad mientras que la venta de empresas industriales requerirá esfuerzos adicionales

del equipo privatizador. El caso de las plantas de Sociedad Paramonga, que pronto serán ofertadas nuevamente, arrojará luces sobre este punto.

Esta nueva oleada de privatizaciones coincide con el hecho de que la COPRI mantenga un perfil más bajo y se plantee fines más modestos, lo cuales resultado de sus tropiezos anteriores. Obviamente las ambiciosas metas propuestas en el acuerdo con el FMI no se cumplieron. El tema debe ser parte de las "flexibilizaciones" que se discutan en Lima con la misión técnica del Fondo.

Pero la tributación está en debate

Probablemente el detonante fue el traslado de la contribución al FONAVI de los trabajadores a los empleadores. Estos últimos deberán asumir el pago del 6% sobre las remuneraciones, mientras el monto que pagarán los trabajadores ha pasado del 9% al 3%. Esta carga adicional sobre los hombros del alicaído empresariado originó inmediatas protestas. El tema reactivó el rechazo a la aplicación de "impuestos antitécnicos" –como el impuesto a los activos, que forma parte de los "sobrecostos" que enfrentan los empresarios–. De allí se pasó a criticar el impuesto a la renta de las personas naturales, que es muy elevado, pese a que la recaudación por este concepto es nula, con lo cual su reduc-

Pasa a la pág. 7-

EL NO DE LAS REGIONES

E

**María
Isabel
Remy**

l NO de la mayoría de los departamentos fuera de Lima es quizás el resultado más nítido del reciente referéndum convocado para ratificar el proyecto de Constitución elaborado por el CCD.

Tanto en los departamentos como, marcadamente, en sus provincias: zonas como Arequipa deben su color verde en el mapa electoral al peso de su vota-

ción capitalina. ¿Cómo entender estos hechos?

Un primer punto surge por descarte: además del notable contraste que muestran los resultados entre las opciones de los electores de la capital y los que viven en los departamentos del interior, no parece haber otra diferencia reconocible. Es decir, la opción por el NO que expresó la mayoría de los departamentos parece ser indiferente respecto de su nivel de desarrollo, su ubicación geográfica o

sus condiciones de pobreza: por ejemplo, el NO resultó mayoritario tanto en departamentos andinos muy pobres como Apurímac o Huancavelica como en territorios costeros con un mayor nivel de ingresos y de desarrollo, tales como Piura y Lambayeque. Departamentos principalmente serranos y con altos niveles de pobreza, como Ancash, fueron de los pocos que dieron resultados favorables al SI. Esta "indiferencia" probablemente muestra que al-

Viene de la pág. 6

ción no afectaría los ingresos fiscales.

Casi al mismo tiempo se reavivó al interior del gobierno una discusión que lleva ya algún tiempo y que enfrenta al Ministro de Economía y al Superintendente de Administración Tributaria con el Ministro de Agricultura, y muestra a los congresistas divididos entre ambas posiciones. Se trata de la aplicación del IGV (18%) a los productores agrarios. Mientras las autoridades económicas y tributarias, con el apoyo del ex ministro Boloña desde la platea, se resisten a exonerar a los agricultores de este tributo, porque ello implicaría abrir una brecha en una política general que no debería contemplar excepciones ni casos especiales, el Ministerio de Agricultura pide la exoneración basándose en el argumento de que el agricultor no puede acreditar el IGV que paga sobre sus insumos ni transferir al consumidor el IGV

que grava su producción, con lo cual resulta afectado por una tasa tributaria elevadísima.

En realidad esta es una batalla a medio ganar por el Ministro de Agricultura, porque la mayor parte de los productos agropecuarios ya fueron exonerados. Ahora están en discusión los que faltan, sobre todo las carnes, y el telón de fondo de la resistencia a disponer estas exoneraciones, a eliminar los impuestos "antitécnicos", así como a reducir el impuesto a la renta a las personas naturales es la fragilidad de la caja fiscal determinada por sus exiguos ingresos. El estancamiento de la presión tributaria en 8% del PBI es materia de preocupación, aunque el Superintendente acaba de anunciar que el número de contribuyentes ha aumentado significativamente – los principales suman 3000, que aportan el 67% del total– y que en lo que va del año la recaudación es 40% mayor que la

registrada en 1992, es decir que en términos reales es prácticamente igual.

Las autoridades anuncian otra "reforma tributaria" pero su margen de maniobra es pequeño, aunque muchas voces piden cambios importantes como la reducción de la tasa del IGV. Mas allá de las deficiencias que existen en la recaudación en este país de la informalidad generalizada, no puede esperarse que los ingresos tributarios aumenten cuando la economía esta en recesión. Los próximos meses deben decir si el crecimiento que se está experimentando es favorable en el terreno tributario. Pero haría bien el gobierno en incluir el tema del ingreso y gasto fiscales en las "flexibilizaciones" que se planteen a la misión técnica del FMI. □

go en la Constitución en consulta o en la práctica de quienes defendieron el SI no es "problema" para los electores capitalinos, pero sí afecta a la mayor parte de la población del interior, por el hecho de vivir en regiones.

Movimientos regionales

Si bien nunca hemos encontrado en los resultados electorales opciones tan distintas entre la capital y las regiones, puede ser útil, para ensayar algunas pistas de análisis, salir de este momento político y recordar una coyuntura que fue muy importante para las poblaciones del interior del país y que sólo después –y por otras razones– movilizó a la capital. Me refiero a los "movimientos regionales" de los años 1976 a 1978. En ese período, una serie de luchas urbano-regionales y movilizaciones de distintos pueblos dieron origen a la formación de frentes de defensa, que reunían a gremios populares, organizaciones empresariales, grupos profesionales y gobiernos locales con el fin de presentar ante el Estado central pliegos de reclamos y demandas de obras de importancia regional.

Vale la pena recordar que estas experiencias no se dieron solamente en las capitales de los departamentos. También existieron movilizaciones en diversas localidades que exigían atención a sus problemas. Fue el caso del pueblo fronterizo de

Iberia, que exigía conexión aérea y medicinas, o el de todos los pueblos de la cuenca del Vilcanota –en el departamento de Cusco– que se oponían al monopolio del transporte interprovincial. Tampoco se debe olvidar que en esos años se generó una movilización campesina en demanda de tierras y contra las empresas asociativas, lo que cambió el paisaje agrario peruano y la estructura de propiedad.

No es forzado decir que un factor que desencadenó estos movimientos fue el hecho de que el presidente de entonces, Morales Bermúdez, anunciara a quien quisiera escucharlo el fin del proceso de reformas emprendido por el gobierno militar. Con ello, para diversos sectores –entre ellos, los regionales– las expectativas de transformación que acompañaron al proceso anterior quedaban nuevamente canceladas: no habría más beneficiarios de transferencias de propiedad ni de grandes proyectos públicos. Había que resignarse a lo que se hubiera logrado, y las regiones no lo hicieron: decidieron movilizarse.

La referencia a los movimientos regionales de fines de los años setenta aporta un segundo elemento que puede haber jugado un papel importante en los resultados electorales recientes, y esto ya no es sólo una comparación. Fueron los movimientos regionales quienes colocaron el problema de la regionalización como un punto importante en la agenda nacional. Ello, como se sabe, fue recogido en la Constitución de

1979. No fue ésta una ocurrencia democrática de los constituyentes; había una expectativa social al respecto, forjada en el período de las movilizaciones. El hecho de que los gobiernos regionales que la Constitución previó y la legislación que se produjo posteriormente –el Plan Nacional de Regionalización, la Ley de Bases de Regionalización, las leyes orgánicas de creación de regiones– funcionaran o no, es otra cosa. Pero la crítica al centralismo bajo la forma de la regionalización expresaba una convicción compartida.

Es probable que, entre otros, dos factores inclinaran la opción mayoritaria de las regiones hacia el NO. Se trata de preocupaciones que no necesariamente forman parte de la agenda capitalina: en primer lugar, el anuncio del repliegue del Estado antes de que haya hecho poco o nada por reducir las desigualdades en servicios, calidad de vida e infraestructura que alejan a las regiones de las inversiones. Efectivamente, en la última década es muy escaso el incremento de la cobertura de los servicios educativos y de salud en las regiones, las que han sufrido el abandono de la infraestructura de comunicaciones, hecho que ha agravado sus déficit de energía. Apoyar en estas condiciones una propuesta neoliberal, que plantea eliminar el rol promotor del Estado y esperar, por ejemplo, que el déficit de energía sea cubierto por la iniciativa privada, sería suicida. El anuncio genera, evidentemente, rechazo.

El segundo factor es la apre-

surada, restringida y contradictoria introducción del tema de la regionalización en el texto constitucional que finalmente fue sometido a consulta, ante las evidencias de que el modelo absolutamente centralista que el presidente y la mayoría parlamentaria habían planteado en el primer proyecto provocaba rechazo. Recuérdese que el proyecto que la Comisión de Constitución presentó a debate establecía como toda forma de autoridad regional un "intendente" nombrado por el Ejecutivo.

No fue ésa, sin embargo, la única evidencia de la existencia de una voluntad centralista en el gobierno central. Desde el 5 de abril, el presidente lanzó su artillería de críticas contra los gobiernos regionales. Estos fueron disueltos y, a diferencia de lo que sucedió con el Parlamento, no se convocó a nuevas elecciones para restituir a sus representantes, aunque fuera de manera recortada. Incluso los propios gobiernos locales fueron avasallados por el presidente, hecho que colocó en la oposición a la mayoría de los alcaldes independientes. Toda autoridad, todo liderazgo que no fuera el suyo, recibieron el desprecio presidencial. Y la tardía introducción de algunos artículos sobre un indefinido gobierno regional en el texto que pasó a consulta no borró la imagen de autoritarismo centralista.

Además, eliminar por tiempo indefinido la representación territorial en el Parlamento, manteniendo como único sistema de elección el de la lista única nacional, terminó de romper

los vínculos entre las sociedades regionales y el Estado.

Parece razonable que contra todo ello votaran las regiones y se pronunciaran y movilizaran líderes locales y regionales, personas con influencia en la opinión pública local y con legítimas expectativas de ampliar espacios políticos que la Constitución niega. Si a ello se suma la ausencia de cuadros regionales —y hasta nacionales— en la alianza de gobierno, no sorprende el enorme espacio favorable al desarrollo de posiciones críticas respecto del proyecto constitucional en las regiones.

Aparentemente, el presidente quiso cerrar esa brecha de opinión inaugurando obras, ofreciendo una imagen de eficacia central como contrapeso a las expectativas de democracia regional y local. Perdió la apuesta.

Regionalización en la agenda

Aprobada la Constitución por escasísimo margen y con la manifiesta oposición de la mayoría de los departamentos, el presidente y la mayoría parlamentaria se encuentran ante un problema complicado. Como el 60 % de electores que Lima representa no es el Perú, los políticos del régimen tendrán que buscar la forma de reconquistar las regiones si aún apuestan a la reelección de Fujimori o cuando menos a mantener un significativo espacio en la política peruana. El presidente respondió a las proyecciones iniciales anunciando más protagonismo

personal y más viajes destinados a inaugurar escuelas, pero es evidente que una estrategia que prescinde del diálogo no será muy productiva y, eventualmente, sí excesivamente costosa. Si algún tema de negociación política deberá aceptar es el de la regionalización. Pero aquí su propia Constitución le juega una mala pasada.

El articulado sobre gobiernos regionales no sólo es ambiguo —por ejemplo, no define competencias— sino de casi imposible aplicación, salvo que se logren pactos muy claros de reforma —que, en algunos puntos, es imprescindible— y una "interpretación" un poco forzada que permita poner en marcha el proceso. Un problema es la introducción apresurada de un régimen de gobierno regional, cuando la voluntad de la mayoría es en realidad mantener un sistema de departamentos. Así, la Constitución señala que el país se divide en distritos, provincias, regiones y departamentos. Las tres primeras divisiones definen formas de gobierno descentralizado. Los departamentos no. La Constitución establece que si uno o más departamentos piden ser región, podrán serlo tras un proceso de consulta y organizar un gobierno regional. Pero si un departamento no lo pide, ¿qué sucede? Estrictamente, no formará gobierno regional y por tanto será el Estado central quien gestione los servicios y funciones públicas en su territorio. Esto significa que habrá

que mantener la estructura pública central para atender departamentos que no conformen espacios regionales, al mismo tiempo que producir un aparato público descentralizado en las zonas que opten por constituirlos. ¿Dos sistemas de administración pública distintos? Es insostenible. En este punto, la reforma es imprescindible.

Un problema más complicado surge del proceso de delimitación de los espacios regionales. En torno al tema probablemente no haya muchas opciones. La Constitución de 1979 eligió la más razonable: un proyecto nacional; es decir, que el Ejecutivo proponga al Parlamento un plan de delimitación de regiones, y que este último lo apruebe o no. Se eludía de este modo la discusión sobre las posibles modificaciones provocadas por localismos que podrían tomar ilimitado el proceso. Posteriormente, las provincias o los departamentos que así lo quisieran podían pedir su incorporación a un espacio regional distinto, pero sobre la base de un plan, de un proyecto.

La Constitución por promulgarse opta por otro camino: el de las iniciativas populares, y prescinde de un plan previo. Teóricamente, cualquier agrupación ciudadana puede solicitar la constitución de una región y cualquier espacio local puede pedir cualquier tipo de integración regional, tal como lo establece el artículo 190 del texto:

Las regiones se constituyen por iniciativa y mandato de las poblaciones pertenecientes a uno o más departamentos colindantes. Las provincias y los distritos contiguos pueden asimismo integrarse o cambiar de circunscripción. En ambos casos procede el referéndum, conforme a ley.

Los referendos destinados a delimitar regiones deberán incluir, entonces, todas las opciones posibles para cada espacio local susceptible de integración a espacios colindantes a él. Un departamento que limite con cuatro podría entonces incorporar en su consulta las cinco opciones básicas para constituir una región –ser autónomo o asociarse con cada uno de los otros– así como todas las combinaciones derivadas de aquellas. ¿Qué sucedería si la mayor parte de provincias de un departamento optan por asociarse con regiones vecinas pero el resto vota en contra? ¿Estas últimas forman región? Y si un departamento vecino opta por asociarse, ¿habrá un nuevo referéndum para decidirlo? ¿Cómo se computan los resultados? Un problema posible: un departamento con población numerosa opta por asociarse con otro de menor cantidad de habitantes, pero éste decide ser región autónoma. ¿Se impone la mayoría del primero?

El proceso podría ser inmanejable e interminable. Casi pareciera haber sido ésta la voluntad de los congresistas de la mayoría.

La alta votación por el NO parece exigir la rápida puesta en marcha de un proceso claro de descentralización. Para hacerlo, se requiere llegar a consensos y superar las restriccio-

nes impuestas por la Constitución. Un proceso de regionalización no es necesariamente contradictorio con un programa de estabilización económica y de ampliación de mercados – más bien, puede ser un aliado– pero sí se opone a una voluntad autoritaria de poder. La opción para el régimen está entre emprender sería y ordenadamente un proceso de constitución de gobiernos regionales con autonomía de gestión y capacidad de planificación de la inversión pública –aceptando la pérdida de control autoritario que ello supone– o mantener abierto un frente de inestabilidad y potencial conflicto.

El SI ganó y la mayoría tiene la iniciativa. Probablemente sólo la tenga para replantear la agenda política y abrir el espacio de negociación que quiso cerrar. Una vez lanzado un proceso constituyente, con los resultados que éste ha tenido, jugar al monopolio del poder puede resultar para el oficialismo crecientemente perjudicial. Quizás la coyuntura del 5 de abril haya terminado y estemos entrando a un nuevo proceso de institucionalización. Ojalá. □

Entrevistas con Manuel Torrado y Alfredo Torres

LOS RESULTADOS ELECTORALES BAJO LA MIRADA DE LAS ENCUESTADORAS

Las observaciones de quienes dirigen los estudios de opinión pública pueden ser una fuente importante para entender los resultados electorales. En este número, consideramos de interés cotejar el aporte que presentan analistas e investigadores en ciencias sociales con las opiniones de Manuel Torrado, de DATUM, y Alfredo Torres, de APOYO, dos de los más conocidos expertos en el campo. Sus lecturas de los resultados electorales del 31 de octubre traducen, asimismo, distintas concepciones acerca de la realidad peruana y del momento político que atraviesa el país.

MANUEL TORRADO
(DATUM)

Argumentos: Los resultados obtenidos por Fujimori en el referéndum, ¿son sólo muestra de su repetida falta de capacidad para endosar adhesiones —como ocurrió en las elecciones de representantes al CCD— o es posible hablar de un desgaste del gobierno?

Manuel Torrado: En primer lugar debemos decir que el endoso no existe en ningún lugar del mundo. La elección de un alcalde, un parlamentario o el voto en un referéndum son siempre más complejos que la popularidad del gobernante. Si el candidato es malo, no habrá nadie que lo levante. Lo que vemos ahora es, entonces, un nivel importante de desgaste del gobierno.

Argumentos: En la última dé-

cada han habido diferencias importantes entre el voto rural y el urbano. ¿Cómo las explica?

MT: Creo que las diferencias que se vienen dando entre las áreas rural y urbana se pueden explicar por la excesiva información que existe en Lima, llámese radio, televisión, periódicos. Mientras Lima está fuertemente informada, las provincias no. Por otro lado, la campaña por el SI estuvo muy centrada en Lima. Yo diría que son los dos Perús que tenemos: el Perú costeño y el Perú andino, que sigue rezagado y desinformado, al que aún le falta integrarse a la parte occidental, desarrollada.

Argumentos: ¿Se puede extender este análisis a las ciudades que quedan en provincias? En ellas el nivel de atraso y la falta de información son mucho menores...

MT: En Arequipa ha habido un sentimiento de abandono y excesivo centralismo. Claro que también hay un problema muy importante de falta de información. Además de estas variables, hay que añadir ciertos anclajes de líderes locales. En Chiclayo, por ejemplo, el alcalde tiene 80% de popularidad. Hay un desarrollo de líderes locales fuertes también en Tacna y Trujillo.

Argumentos: Durante los años 80, la votación en la capital mostraba diferencias importantes entre los distintos sectores sociales: mientras el electorado de las clases populares votaba por alternativas de centro-izquierda o izquierda, los sectores acomodados optaban por la derecha o por partidos de centro-derecha. En los últimos pro-

cesos electorales estas diferencias se han diluido. Por ejemplo, en el referéndum del 31 de octubre, Lima mostró una votación muy homogénea. ¿Cómo explica usted este cambio?

MT: Creo que los ejes ideológicos ya no están funcionando. Hace tiempo que el pueblo empezó a actuar y decidir al margen de ellos. Pienso que este proceso empieza con la caída de Alan. El reunía una serie de esperanzas acumuladas: juventud, voluntad, presencia. En 1985, después de las elecciones, la ONU realizó un estudio a nivel mundial llamado "La esperanza de la humanidad". El Perú estaba en primer lugar. Al final del período García ocupábamos el último. Esta gran decepción hace que la gente sea muy escéptica y desconfiada. Al final no se da ningún componente de clase en la elaboración de las opiniones. Nuestros estudios demuestran que los sectores más altos y los más bajos votan en mayor proporción por el SI mientras que la adhesión más débil a la nueva Constitución se da en la clase media baja, que es la que ha perdido más en este gobierno. Estamos ante un electorado muy desconfiado, que mide mucho el gesto y la forma. En estas condiciones el liderazgo de Fujimori no es fuerte. Yo lo llamaría un liderazgo de margarina, porque la gente no da la vida por él; es el mal menor. La población no se entusiasma ni sale a manifestarse en las calles a favor del líder

Argumentos: Los jóvenes muestran una adhesión más fuerte al gobierno de Fujimori que otros grupos de edad. ¿Cómo se puede explicar este hecho?

MT: Es cierto que los jóvenes están más con el SI que la gente mayor y lo mismo ocurre con las mujeres. Esto puede explicarse porque el voto por el NO es más militante, mientras el SI es más pasivo. Las mujeres siempre votan de manera más conservadora que los hombres, aunque en otros países esto está cambiando. En el caso de los jóvenes, se trata de un fenómeno mundial. Resulta que la derecha española le gana a la izquierda en este grupo de edad. Han vivido la socialdemocracia de Alan García y de Felipe González. La rebeldía juvenil se dirige hacia la derecha, la inconformidad se canaliza a través de estas opciones.

Argumentos: En sociedades estables, con sistemas de partidos fuertes e instituciones consolidadas, las preferencias del electorado normalmente se encuentran adscritas a dos o tres alternativas políticas y las variaciones entre ellas no son muy grandes. En el Perú, por el contrario, hemos visto en los últimos procesos electorales grandes vuelcos y caídas días antes de cada elección. ¿Este fenómeno es particular de países como el nuestro o puede ser observado en otras sociedades?

MT: Creo que esta situación solamente se da en el Perú. Es algo que va en contra de la teoría electoral, que afirma que la variación entre proyecciones y resultados es, a lo más, de dos puntos. Podría ser que para mucha gente no haya habido nada en juego. Un estudio nos dice que 56% de las personas no tenían ningún interés por la votación. En estos cambios han influido desde el desinterés hasta los problemas o inconvenientes

que la gente tuvo el día de la votación. A esto se suma la excesiva confianza que tuvo la gente del SI, que esperó resultados del orden del 70% contra el 30%. Estas expectativas, junto con la práctica ausencia de una campaña por el NO, trivializaron finalmente el voto y la gente terminó optando por el NO "para que el chino no se sobre". Entonces, el NO tiene una gama de matices: por ejemplo, según encuestas realizadas recientemente, hay un 7% que vota así porque está en contra del gobierno, un 13% que se opone a la nueva Constitución, un 4% no está de acuerdo con la reelección, 4% rechaza la pena de muerte. Mientras que el SI es un todo, es de un solo color, porque tiene que aceptar al gobierno y a la Constitución en un solo bloque. El NO puede tener matices: "Sí, estoy con el gobierno, pero no me gusta este o aquel punto". En el caso de Lima, de cada cinco personas que ha votado por el NO, una está de acuerdo con la política del gobierno y con Fujimori. Otro factor es que la gente no tomó el referéndum como un plebiscito. El pueblo peruano ha sido tantas veces engañado que ya se las sabe todas, por lo cual es muy desconfiado. Los argumentos del tipo "me voy si sale el NO" no convencen a la gente. El análisis de por qué se dan estos cambios repentinos debe partir por observar rumores que progresivamente cobran fuerza y forman una tendencia. Este es un fenómeno muy peruano. Tal vez sea la versión electoral de la costumbre nacional de dejar todo para la última hora.

Argumentos: Una postura del mercadeo político plantea que las formas tradicionales de propaganda política —como el mitin, los volantes y los afiches— deben dar paso a un uso más intensivo de la televisión. Una entrevista amigable, un spot televisivo y una aparición en los pro-

gramas familiares serían lo central. Sin embargo, en los procesos electorales recientes los resultados no han sido los esperados. ¿No estará la gente de la televisión valorando excesivamente su real influencia?

MT: En este punto la mayor parte de encargados de campaña muestra un considerable desconocimiento. El problema no son los medios. Con el FREDEMO se gastaron cerca de 14 millones de dólares y fue un fracaso. No es entonces, simplemente un problema de aparecer en la TV. Para manejar una campaña yo requiero, en primer lugar, tiempo. En segundo lugar, una buena estrategia. Es allí donde fallaron el FREDEMO y el SI. Uno puede tener todos los artistas y personajes de la TV dándole apoyo a su postura, pero si la estrategia no es la adecuada no se obtendrán resultados. Por ejemplo, en las elecciones de 1980, el APRA postuló a Villanueva, que no representaba una imagen de apertura sino todo lo contrario. En cada elección hay algo que está en juego. Si uno logra determinarlo, prácticamente tiene ganada la elección. No es cuestión de medios o de formas sino de estrategia.

Argumentos: La diversidad de intereses que de una u otra manera parece representar el NO, le da también un carácter frágil y disperso. La posibilidad de que el mismo electorado apoye a un candidato opositor en 1995 no parece asegurada de antemano. ¿Cómo imagina el escenario electoral para 1995?

MT: De los que han votado por el SI y por el NO, el 65% no está de acuerdo con los partidos políticos. Hemos visto que el NO es un paño de muchos colores. No ha sido un triunfo de los partidos políticos, está claro. Pero se ha quebrado la imagen monolítica y fuerte de Fujimori. Antes los representantes de un partido iban a provincias con intenciones de

captar militantes o simpatizantes y no había nadie interesado. Ahora se han abierto nuevas dinámicas. Nuevamente puede parecer atractiva la idea de pertenecer a un partido. Pero esto no es necesariamente seguro ni inmediato. Ello puede dar paso a nuevos líderes locales, como en el caso de Daniel Estrada, que puede adquirir una presencia nacional a partir del Cusco. Esto es así porque el tiempo político de Lima —y también el de provincias— es muy rápido. Un líder alternativo puede surgir meses antes de las elecciones de 1995. En esas condiciones, hablar del largo plazo puede ser ciencia ficción.

ALFREDO TORRES (APOYO)

Argumentos: A la luz de los resultados del referéndum del 31 de octubre, ¿se podría señalar una incapacidad de Fujimori para endosar adhesiones o sería posible percibir indicios de desgaste en el gobierno?

Alfredo Torres: Me parece que la importancia que se le ha dado al endose es mayor del que le corresponde. En primer lugar, en ninguna parte éste representa un porcentaje significativo para alguna candidatura. Si un candidato recibiera una alta votación, ésta no podría explicarse por este factor. Estaríamos hablando de un nuevo líder. Ahora bien, los resultados obtenidos en el referéndum no necesariamente representan una derrota para el gobierno. Se han cumplido los objetivos propuestos. Lo que pasa es que como se plantearon expectativas muy altas, cualquier resultado menor es percibido como una derrota. Más aún, podría decirse que la opción del presidente ha obtenido más votos que en las elecciones al CCD. Entonces es difícil hablar de un desgaste del gobierno.

Argumentos: ¿Cómo pueden explicarse las diferencias entre

el voto de la ciudad y el de las provincias?

AT: Pueden explicarse por el hecho de que el discurso del presidente ha estado mucho más centrado en la ciudad que en el campo. Los éxitos más visibles del gobierno son mayormente apreciados por los habitantes de la ciudad antes que por las provincias, las cuales empiezan a sentirse relegadas. Las perspectivas abiertas por las promesas de reactivación económica son mayores en la ciudad, donde el desarrollo permite acceder a muchas ventajas mientras que en la provincia es más difícil adaptarse a un escenario neoliberal.

Argumentos: ¿Cómo explica usted la disolución de las diferencias entre el voto de sectores populares, medios y altos que es posible observar en nuestro país en las elecciones de los últimos años?

AT: Es cierto que las diferencias entre la votación de pobres y ricos ha empezado a desdibujarse. Esto se explica porque el discurso de Fujimori tiene la ventaja de crear adhesiones tanto en los segmentos sociales de altos ingresos como en las clases bajas de la ciudad. Los sectores ricos pueden observar algunos resultados de la política económica del gobierno mientras que en las clases pobres las esperanzas y las expectativas han crecido mucho en estos años. Los logros en la lucha contra el terrorismo, el control de la inflación, la reinsertión económica y las perspectivas de reactivación son factores que benefician a ambos grupos.

Argumentos: ¿Es una tendencia significativa y constante la pronunciada adhesión que muestran los jóvenes hacia el gobierno respecto de otros grupos de edad?

AT: Es ciertamente una tendencia constante, pero no significativa. No hay muchos estudios sobre las preferencias elec-

torales o políticas de los jóvenes en estos momentos, pero la mayor simpatía que éstos muestran hacia Fujimori puede explicarse por el hecho de que tienen más esperanzas en la recuperación del país. A partir de la reactivación económica, sus expectativas de conseguir empleo son mayores. Asimismo, los éxitos logrados en la lucha contra el terrorismo en las universidades han permitido al presidente ganar algunos puntos. A todo esto se suma la crisis de las grandes ideas en el mundo, la que no puede dejar de tener repercusiones en el país. En este contexto, serán cada vez más los jóvenes interesados en salidas individuales antes que colectivas.

Argumentos: Los cambios vertiginosos y de último momento que se han dado en los procesos electorales recientes, ¿son un fenómeno específico de países como el nuestro?

AT: Creo que se trata de un fenómeno internacional. En las últimas elecciones presidenciales llevadas a cabo en los Estados Unidos apareció al margen del sistema de partidos un candidato independiente, Ross Perot, que no logró el triunfo pero sí una presencia importante. Asimismo, la victoria de Felipe González en España se decidió pocos días antes de las elecciones después de que durante un buen tiempo el candidato opositor encabezara las encuestas. También en los países del Este podemos apreciar que surgen liderazgos al margen de los partidos y de la política pero que aún no logran mayor organización ni convencer a la mayoría del electorado como aquí lo hizo Fujimori. Creo que detrás de estos procesos está la crisis de una forma de hacer política así como de los partidos tradicionales. La conducción realizada en diversos países por los políti-

cos ha creado en el electorado diversos sentimientos que oscilan entre la desconfianza y el rechazo.

Argumentos: ¿Opina que en los recientes procesos electorales se ha exagerado el poder de los medios de comunicación masiva como instrumentos de propaganda electoral?

AT: Ciertamente en un país heterogéneo no se puede prescindir de ningún medio de comunicación. Especialmente en provincias, donde la cobertura de los medios más modernos es menor a la que tienen en la capital. Lo ideal es combinar el uso de los medios de acuerdo a cada lugar. En provincias sería importante hacer mítines, volantes y afiches. No se trata solamente de un viaje a la capital del departamento, porque de este modo se dejan muchos poblados sin visitar y en ellos la influencia de la televisión es mucho menor. Por otro lado, en la ciudad tampoco se puede centralizar todo en la televisión. Se debe hacer un manejo más sutil de los medios, porque desde la experiencia del FREDEMO la gente desconfía de las campañas televisivas, en la medida en que las asocia con una fuerte inversión económica.

Argumentos: ¿Ve usted una presencia importante de los líderes locales en la definición de las opciones políticas que se manifestaron en el último proceso electoral?

AT: Hasta ahora no veo líderes locales con suficiente presencia como para adquirir pro-

yección nacional. Por ejemplo, el alcalde Estrada cuenta con una alta votación y considera que tiene perspectivas nacionales, sin embargo en la ciudad del Cusco ha habido un virtual empate entre el SI y el NO. Claro que en el departamento ha ganado ampliamente el NO. Pero fue en la ciudad donde el alcalde hizo una campaña más fuerte y sólo consiguió un empate. Hasta ahora no ha surgido un líder político del interior que pueda tener un arrastre mayor.

Argumentos: Se dice que el voto por el NO implica adhesiones frágiles en tanto es una suma en muchos casos contradictoria de objeciones e intereses. ¿Pero hasta qué punto es más sólido el voto por el SI? ¿Expresa una adhesión firme a Fujimori?

AT: El voto por el SI es en gran parte un voto de esperanza. Detrás del voto a favor de Fujimori hay una aprobación de lo que viene haciendo y la confianza de que va a seguir en la línea actual. A diferencia de Haya de la Torre o Belaúnde, Fujimori no es la persona que puede provocar un gran arrastre. No crea grandes entusiasmos. Mucha gente considera que ha obtenido resultados en la lucha contra la subversión, ha bajado la inflación, entonces decide apoyarlo para que continúe haciendo las cosas de esa manera. Pero no es una adhesión ciega. Si no logra la reactivación económica prometida o continúa el terrorismo, con la misma rapidez con que obtuvo el apoyo, lo perderá, porque no

tiene detrás ni una organización ni una adhesión fuerte.

Argumentos: ¿Podría definir un posible escenario electoral para 1995?

AT: Creo que para 1995, Fujimori todavía puede mantener un nivel importante de fuerza en la medida en que las financiaciones del próximo año le permitirían hacer mucha obra social, que generaría empleo y servicios. La expectativa producida por este hecho nos muestra un presidente con posibilidades importantes de continuar en el gobierno. Por el lado de la oposición, me parece que la mejor carta que podrían presentar ellos –y no sé si todas las fuerzas políticas tengan el suficiente realismo político para entenderlo– sería un discurso que reconozca los logros del gobierno de Fujimori, pero que al mismo tiempo plantee algunas mejoras o políticas complementarias que no desanden lo avanzado. Si la estrategia se basa en esto es muy probable que el candidato opositor obtenga algún respaldo. Por el contrario, presentan un candidato "combatiivo", como está proponiendo un político tradicional que vocea al general Salinas, pero estas candidaturas tienden a ser simbólicas, pueden articular al núcleo más militante en contra de Fujimori pero no logran captar al votante que está al medio y no muy politizado. La disyuntiva es, para la oposición, una propuesta más abierta, menos confrontacional, o un discurso más conflictivo, que busque enfrentarse directamente con Fujimori (Carlos Mejía). □

Premio Nobel y desarrollo de la disciplina LA "NUEVA HISTORIA ECONÓMICA" DE NORTH Y FOGEL

H

ace unas semanas la Academia de Ciencias de Suecia decidió otorgar el Premio Nobel de Economía a dos historiadores económicos Norteamericanos: Robert Fogel y Douglass North. De

**Manuel
Glave
Testino***

una u otra manera, ambos están asociados al nacimiento de la llamada 'nueva historia económica' o 'cliometría', a mediados de la década de los sesenta. Se conoce como 'cliometría'—denominación que combina el nombre de la musa griega de la historia, Clío, y el de la econometría— a la escuela de historia económica norteamericana que superó las limitaciones de una mera "historia cuantitativa" al desarrollar modelos hipotético-deductivos que permiten verificar las hipótesis a través de métodos estadísticos o, en todo caso, por medio de la derivación lógica a partir de las premisas formuladas.

La 'cliometría' se hizo famosa a través de los debates sobre la eficiencia de la esclavitud en la agricultura del sur norteamericano durante el siglo XIX, discusión a la que Robert Fogel contribuyó con un libro clásico, escrito con Stanley Engerman: *Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery* (1974). Las discusiones sobre el papel que jugaron las redes de ferrocarriles y de canales navegables en el desarrollo del mercado norteamericano durante la segunda mitad del siglo XIX fueron otro campo fértil para desarrollar estas nuevas metodologías de investigación histó-

rica, y Fogel también contribuyó en su desarrollo con *Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History* (1964), libro que, junto con el trabajo de Albert Fishlow, *American Railroads and the Transformation of the Antebellum Economy* (1965), establecieron criterios metodológicos para la investigación en el campo de la historia económica durante los años sesenta.

Si bien es cierto que Douglass North participó en los debates sobre el crecimiento de la economía norteamericana en el siglo XIX, como lo muestra el libro escrito con Lance Davis, *Institutional Change and American Economic Growth* (1971), su mayor contribución ha sido *sin lugar a dudas The Rise of the Western World. A new Economic History 900-1700* (1973), escrito con Robert Thomas. Este libro, que presenta una visión de la historia europea de fines de la Edad Media basada en la continua reducción de los costos de transacción—costos de negociación, de supervisión y de cumplimiento de contratos— y analiza los cambios institucionales asociados a la desaparición de la agricultura de campo abierto y la formación de derechos de propiedad privada, se ha convertido en lugar común en las discusiones sobre el desarrollo capitalista en Europa. Posteriormente North publicó *Structure and Change in Economic History* (1981), texto en el que intenta generalizar una teoría del cambio institucional desde el punto de vista de la historia económica que le permitiría estudiar variados procesos: los

orígenes de la agricultura (denominada "la primera revolución económica"), el apogeo y la crisis del feudalismo, la revolución industrial y el crecimiento económico norteamericano durante el siglo XIX. Recientemente North publicó *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (1990), como parte de una serie sobre "economía política de las instituciones y decisiones" que él mismo edita.

Los límites de la 'cliometría'

La decisión de la Academia de Ciencias tiene enorme importancia para el desarrollo de la teoría económica. Junto con la premiación de Ronald Coase en 1991, la Academia está reconociendo a la nueva economía institucional—en particular, a la escuela de los costos de transacción (Coase y North)— y resaltando el papel de la historia económica, en un contexto en que cada vez menos universidades la consideran como una especialidad dentro de la economía, llegándose al extremo de no ofrecer cursos vinculados a ella (peligro que corren los programas de economía en el Perú). Se trata de una muestra de que la Academia considera necesario mantener en la investigación económica ciertos principios vinculados a la tradición de Alexander Gerschenkron, Simon Kuznets y los recientemente premiados.

"Conveniencias y peligros de

* El autor es economista, investigador de CEPES y profesor de economía campesina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de historia económica en la Pontificia Universidad Católica.

aplicar los métodos de la 'nueva historia económica', era el título de una ponencia que Ruggiero Romano presentó en la comisión de historia económica del XXXIX Congreso Internacional de Americanistas (Lima, 1970). En ese trabajo Romano argumentaba que la verificación de las hipótesis basada en la derivación lógica de una proposición de acuerdo con sus premisas, o en su relación con los datos empíricos, no eran posibles para estudiar la historia de América Latina debido a la insuficiencia y escasa confiabilidad de los datos "cuantitati-vos". Ciertamente Romano no vislumbraba entonces la rigurosidad de los trabajos de la nueva economía institucional desarrollados en las dos últimas décadas. Pero la búsqueda de información cuantitativa confiable y de calidad lleva consigo un

peligro metodológico que algunos han denominado el "fetichismo de la econometría", es decir, el culto de los métodos en perjuicio de un mayor y mejor conocimiento de la realidad social. Romano reclamaba con razón que el análisis histórico de los procesos de producción, circulación y distribución de la riqueza no puede ser reemplazado —ni mucho menos eliminado— por un modelo deductivo en el estudio del desarrollo económico.

Donald McCloskey, en su artículo "Does the Past have Useful Economics", publicado en *Journal of Economic Literature* (1976), afirma que la historia es esencial para la economía no sólo porque proporciona más y mejores "datos económicos" sino fundamentalmente porque permite mejorar la construcción de la teoría eco-

nómica, el diseño de políticas económicas y la formación de los economistas. En este sentido, McCloskey es crítico del rol que ha jugado la 'nueva historia económica' en la formación de los economistas; considera que "durante 15 años o más los 'cliométricos' han mostrado a sus colegas de historia la maravillosa utilidad de la economía. Es tiempo de que comiencen a mostrar a sus colegas de economía la maravillosa utilidad de historia". En la práctica, la historia económica se ha convertido en una especialidad que poco o nada tiene que ver con la formación de los economistas y menos aún con el desarrollo de la teoría económica. La decisión de la Academia de Ciencias puede ayudar a cambiar esta tendencia.

IEP

INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS

Horacio Urteaga 694 LIMA 11 ☎ 323070 / 244856 FAX (005114) 324981

BY AIR MAIL
VIA AEREA

